

Notable y oportuno

Corrupción. Metáfora de ambición y deseo

HERMES TOVAR PINZÓN
Universidad de los Andes,
Bogotá, 2014, 331 págs.

EN COLOMBIA en los últimos años, como parte de la consolidación de la universidad de la ignorancia, la investigación se convirtió en un rentable negocio para unos cuantos mercachifles del saber, cuyo objetivo supremo radica en cosechar puntos que amplíen sus ingresos salariales mediante la publicación de artículos en revistas indexadas o en la dirección de grupos de investigación en los que un personaje oficia como director para apropiarse de la labor que realizan sus subalternos, gran parte de ellos convertidos en fuerza de trabajo intelectual semiesclava. En este caso la investigación resulta ser un engaño, o un simulacro, pues se da el caso que “consagrados investigadores” jamás escriben un libro o un ensayo de largo aliento, pues se limitan a reproducir el mismo artículo con títulos diferentes en diversos medios. La universidad colombiana se ha llenado de este tipo de investigadores, maestros del plagio, el engaño y la simulación, propios de una corrupción académica cada día más extendida y generalizada. En este caso, el término investigación se ha desnaturalizado y perdido su sentido original de búsqueda afanosa de la pista de algún elemento relacionado con el saber, para tornarse en un negocio que produce beneficios particulares a quien oficia como investigador.

Este carácter engañoso y recortado de la investigación puede resumirse en pocas palabras, diciendo que la investigación se convirtió en un negocio. Pero la investigación de verdad, es otra cosa: es una pasión, un oficio, un compromiso. Una pasión, porque está sujeta a los deseos, a las convicciones, al convencimiento de persistir en la búsqueda permanente de la verdad, al margen de las minucias y engaños coyunturales de los logros pasajeros. Un oficio, que se desempeña con altura, seriedad y responsabilidad, sin importar si en esa labor se obtienen beneficios económicos o no. Un compromiso que no busca

títulos, premios o reconocimientos, sino que opera con la lógica del artesano, que con dedicación se esmera en hacer las cosas bien y en edificar sin prisa ni apremios. El sentido profundo de la investigación es lo que nos recuerda en cada nuevo trabajo el historiador colombiano Hermes Tovar Pinzón, quien ahora nos brinda el libro *Corrupción. Metáfora de ambición y deseo*.

Este es un recorrido por la historia de Colombia en los últimos cinco siglos, y no podía ser de otra forma, porque nuestro país es un verdadero laboratorio mundial de la corrupción, de la triquiñuela, del despojo, del robo, por parte de unas clases dominantes que siempre han vivido de las tierras, de las riquezas naturales y de la fuerza de trabajo, abundante y mal paga. Visto en retrospectiva, y con una mirada de larga duración, como lo hace el autor del libro que comentamos, se comprende que las miserias del presente, aunque sean mostradas como grandes logros por los órganos de prensa de las clases dominantes (representados como símbolo principal en *El Tiempo*, siempre a tiempo para mentir, calumniar y tergiversar), que el cohecho sea visto como un delito de uno (tal y como ha sucedido con Yidis Medina y el voto de la reelección presidencial del 2006), y que los crímenes particulares y los realizados desde el Estado den prestigio y lleven a calificar a uno de sus perpetradores como el “personaje más importante de la historia de Colombia”. Esto que puede catalogarse como el principal logro de la consolidación de una cultura traqueta en la sociedad colombiana, no es, sin embargo, un asunto que pueda entenderse y explicarse a partir de acontecimientos recientes, sino que hunde sus raíces en tiempos lejanos de la conquista y la colonia, como lo demuestra con lujo de detalles Hermes Tovar.

En efecto, en la colonia se asentó una santa trinidad, cuyo legado de miseria y dolor, se proyecta hasta el momento actual: “La santa trinidad de funcionarios, familias poderosas y clero diseñó mecanismos de expoliación, exclusión, sobornos e injusticias” [pág. 18].

Para hacerlo posible, crearon sus propios aparatos de castigo y de tortura y sus propios tribunales de justicia. Se unieron para controlar la distribución de la tierra y para hacer de los

ingresos fiscales y de todas las estructuras de poder los fundamentos de su hegemonía y de su moral. Unidos por el miedo ante las demandas crecientes de la plebe, presionaron a jueces para que no actuaran en derecho y fundaron el principio de que la ley es ‘para los de ruana’. Y cuando el miedo a la plebe creció, los altos tribunales y poderes del Estado sentenciaron que la paz debía obtenerse a ‘sangre y fuego’. [págs. 18-19]

En concordancia, puede extenderse un hilo indeleble que une procesos históricos en apariencia dispares, como lo que acontecía en las haciendas coloniales y lo que sucede con las tierras en la actualidad, con la finalidad de controlar cuerpos y almas, usurpar las tierras de indígenas, campesinos, mestizos, afrodescendientes, y por eso las “gentes de bien” han recurrido a la militarización, a las bandas de pájaros y sicarios, tanto ayer como hoy.

Precisamente, por considerar la diversidad de elementos que rodean la corrupción estructural que carcome a la sociedad colombiana, el autor nos precisa qué entiende por corrupción: “no es solo robar, sino matar, prevaricar, vender el derecho a fornicar, engañar y utilizar el poder para ocultar sus compromisos con bandas de criminales. La corrupción también es silencio, como el que guardan empresas que controlan la cultura, para que no hablen los autores que critican el sistema político, agrietado por la corrupción” [pág. 34].

El libro está dividido en cuatro jugosos capítulos, cada uno de los cuales parece ser un relato de ficción, como si fuera la invención de un literato de mundos fantásticos y no un reflejo de la dura historia de Colombia. Aunque no siguen un orden estrictamente cronológico, si se observa una continuación temporal entre todos ellos, para transmitir una imagen articulada de la larga historia del país desde el siglo XVI, hasta comienzos del siglo XXI. El primer capítulo se titula “El arte de corromper la tierra” [págs. 41-107], que se ocupa, *grosso modo*, de la colonia, y allí se abordan las fuentes originarias de la corrupción, que emergen en el mismo momento de la conquista, cuando los hombres de España que llegan a estos suelos instauran un poder que tiene por objetivo principal enriquecerse a

RESEÑAS		
<p>costa del trabajo de los indios y negros y dilapidar los recursos de la Corona. Los primeros ladrones y corruptos estaban ligados al aparato de Estado en formación, se apropiaban de las tierras y riquezas de los nativos, pero además falsificaban moneda, traficaban con esclavos en cantidades mayores a las establecidas en los documentos oficiales, cobraban impuestos adicionales a sus súbditos y castigaban sin piedad a quien se atreviera a denunciar sus robos y triquiñuelas, asolaban el erario y despilfarraban a sus anchas los ingresos fiscales. Esto generó la “cultura de la impunidad” que reina en nuestro medio, y que se sustenta en la “cultura de la represión”, es decir, perseguir, encarcelar o matar a quien se atreva a denunciar y pretenda que se haga justicia. Y si, casi por azar, algún funcionario de alto rango de la Corona trataba de hacer justicia, los investigados procedían a organizar tumultos y de hacer bochínche, para legitimar el fraude y el robo. Esas prácticas no desaparecieron con la independencia ni en la época republicana, sino que se proyectan hasta el presente, cuando se sabe que el Estado es un botín al servicio de las diversas fracciones de las clases dominantes.</p> <p>El segundo capítulo se titula “La bonanza de los recursos públicos” [págs. 109-147], que parte de la independencia y aborda el siglo XIX. En este capítulo se estudian los mecanismos que convirtieron a los “padres de la patria” en los usurpadores de los fondos públicos, heredados de la Corona. La independencia no supuso ningún cambio fundamental para las gentes de color quebrado, pero sí para los criollos, quienes libres de los controles del periodo colonial, tenían el camino abierto, para apropiarse del tesoro público, robar y usurpar tierras baldías, repartir los cargos del Estado a sus familiares y amigos. Para preservar su botín, si era preciso, se hacían las guerras civiles, en las que los miembros del pueblo bajo solo participaban como carne de cañón, para garantizar que los nuevos amos disfrutaran de la rapiña de tierras y riquezas del tesoro público. Con la información proporcionada en este capítulo quedan muy mal parados prohombres de la “historia patria”, algunos de los cuales ocuparon la Presidencia de la República, como José Hilario</p>	<p>López, Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando... Con detalles, Hermes Tovar nos recuerda los robos de tierras en que participó José Hilario López, la responsabilidad de Obando en el asesinato de Antonio José de Sucre, el nepotismo de Tomás Cipriano de Mosquera. Además, algunos de ellos fueron traidores a la patria en sentido estricto, porque estuvieron inmiscuidos en proyectos de segregar el territorio colombiano, pensando siempre en los beneficios personales que eso les podía traer. Esto ejemplifica que la corrupción, el cinismo y la inmoralidad son una característica distintiva, y de largo aliento, de los llamados líderes nacionales. Desde entonces se estableció la inveterada costumbre que ningún presidente ha sido juzgado por sus delitos y sus crímenes, pues gozan de inmunidad, porque “los presidentes de Colombia han constituido un club que los protege de sus excesos e indelicadezas. A este club parece no tener acceso la justicia y todos sus actos quedan en la impunidad” [págs. 124-125].</p> <p>El tercer capítulo lleva por nombre “La bolsa o la vida” [págs. 149-229]. Es el más extenso de todos y se trata un sinnúmero de asuntos relacionados con la corrupción y desigualdad estructural de la sociedad colombiana. Es tal la riqueza temática de este capítulo que es muy difícil hacer una síntesis en la que se puedan involucrar los aspectos considerados. Simplemente, anotemos que el autor efectúa una diferenciación interesante, y necesaria en aras de la precisión histórica, entre el crecimiento económico, urbanización sostenida y modernización de la sociedad colombiana –aspectos con los que suelen regodearse aquellos historiadores y economistas que hablan de la gran mutación del país–, sin que puedan ocultar que en el fondo de esas transformaciones se mantiene una terrible desigualdad e injusticia, como parte de la cual se incrementa la pobreza. En ese panorama de supuestas transformaciones, Hermes Tovar se encarga de recordarnos cómo ha funcionado la educación y la salud desde la independencia, y cómo en distintos momentos de nuestra historia, y se ocupa principalmente de lo que se decía a comienzos de la década de 1930, se hacían balances sobre el ruinoso estado de la educación en este país, que no se diferencia</p>	<p>mucho con los diagnósticos actuales, que recomendaban dignificar la labor del maestro como una condición para mejorar la educación y la calidad de vida en el país, algo que todavía sigue siendo una quimera. Controvertiendo la tesis de la modernización ineluctable del país, el autor nos recuerda cuáles han sido los efectos sociales de dicha modernización:</p> <p>Si en el momento de la Independencia de 1810 existía un 20% de la población que disfrutaba de buenas condiciones de vida, ¿cómo es posible que 200 años después exista un 60% de la población con necesidades básicas insatisfechas? Cada 100 años apenas un 10% de la población puede acceder a niveles medios y altos de consumo. El modelo liberal ha demostrado que serían necesarios 300 años más para incorporar a un 30% de población pobre y lograr que un 70% de nuestra población alcance un estatus diferente al de las cornisas de la inseguridad económica. ¿Podremos predicar a quienes reciben menos de \$5000 pesos diarios (2,50 dólares) que tendrán que esperar cien o trescientos años para ser incorporados a niveles de consumo mínimos y a las ventajas de la globalización? [págs. 216-217]</p> <p>El autor despliega en este capítulo una exhibición de erudición y conocimiento de la historia de Colombia, centrándose en la descripción y análisis de diversos sistemas de corrupción, ligados de manera directa a la violencia y a la impunidad. Destaca el papel de los paramilitares como correa de transmisión de las nuevas fracciones de poder mafiosas, ligadas con los políticos tradicionales y a través del Estado, que a sus anchas persiguen y matan. Entre los numerosos ejemplos que nos recuerda el autor para ilustrar su impresionante denuncia, solo evoquemos dos casos. El primero, el del político liberal César Pérez García, para más señas dueño de una universidad en la que se dicta una cátedra (¿de ética?) que lleva su nombre, responsable del asesinato de cuarenta y cinco colombianos humildes en la masacre de Segovia en 1988, perpetrado para mantener su poder político y destruir a los miembros de la Unión Patriótica, que habían osado ganarle las elecciones en su feudo electoral. El segundo</p>

ejemplo es el del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo León Díaz, quien el 1.º de febrero de 2003 dijo en una audiencia pública, en la que se encontraba Álvaro Uribe Vélez, transmitida por televisión para todo el país, que a él lo iban a matar y dio el nombre de la persona interesada en hacerlo. Esto no hubiera pasado de ser una anécdota, si no es porque en efecto el 10 de abril de ese año fue asesinado. El asesino fue el gobernador de Sucre, Salvador Arana, que luego fue designado, “por ser un buen muchacho”, como embajador en Chile, por Álvaro Uribe Vélez. Es decir, el criminal no solo fue protegido y nada se hizo para evitar este asesinato, sino que además al responsable se le premió con una embajada. Un claro ejemplo de los nexos entre Estado, violencia, corrupción e impunidad.

Esos son dos ejemplos de lo que se dice en este capítulo, cuya parte central se dedica a develar los nexos criminales de la Seguridad Democrática en el periodo 2002-2010, con sus respectivos antecedentes en las Convivir, los nexos con los paramilitares, la mal llamada parapoltica y la responsabilidad criminal de amigos, familiares, ministros, parlamentarios y funcionarios del gobierno del “corazón grande y la mano tendida”. La corrupción se ha extendido a todos los ámbitos de la vida colombiana y no es exclusiva del Estado, sino que también participan el sector privado, los empresarios, los medios de comunicación, de las universidades..., como muestra de que la corrupción se ha convertido en la norma y no en la excepción, y por eso Colombia es uno de los reyes de la impunidad y la corrupción.

El último capítulo se denomina “El cuerpo y el documento” [págs. 231-291] y se centra en un tema que es crucial a la hora de entender la corrupción y la impunidad, como es el relativo a la destrucción de las huellas, registros, evidencias y testigos de los crímenes y delitos. La criminalidad privada o pública y el Terrorismo de Estado dejan rastros de sus acciones delictivas, los nombres de los responsables, lugares y fechas de los delitos..., por lo que existe una sistemática campaña para hacer desaparecer las huellas de los crímenes. Por eso, en Colombia no solo se destruyen los archivos, sino que se mata a aquellas personas que puedan tener

acceso a documentos comprometidos o que sean testigos presenciales de la corrupción y de sus crímenes. La tesis de Hermes Tovar enfatiza:

El sistema político no sólo recurre al soborno y al crimen sino que busca eliminar documentos que pueden dar cuenta de delitos y masacres. La corrupción se extiende contra todo aquello que sirva de testimonio sobre desafueros de individuos, empresas o instituciones. En otras palabras, mata el cuerpo y sus recuerdos y hace de la memoria las cenizas de lo incierto. Para prescindir del testimonio oral, es necesario el secuestro y la tortura, y para el documento escrito y las artes, es preciso alentar el fuego que dará cuenta, además del grabado, de la pintura o de la fotografía. En fin, todo texto delator circunstancial de otros tiempos está en el orden del día de los fanáticos de la política para ser eliminado. [pág. 239]

Con esta idea, Hermes Tovar hace un seguimiento por un terreno que conoce a la perfección, como es el de los archivos, y en especial en el caso del Archivo General de la Nación en Bogotá, señalando con detalle los vacíos y lagunas documentales de ciertas épocas, que no son resultado del azar ni la casualidad, sino de un proceso sistemático de destrucción por parte de aquellos interesados en eliminar los rastros de sus responsabilidades políticas y de sus crímenes, como sucede para el periodo de la Violencia, entre 1948 y 1957. Lo significativo es que esos interesados en destruir archivos son los mismos dueños del país, que han convertido a Colombia en una gran hacienda, en la que son amos de tierras, empresas, cuerpos y almas, porque “La mano que ha prescindido de los archivos del Congreso de los años de la Violencia y de otros años es la misma que funda la “pajaramenta” o el sicariato para eliminar a críticos del régimen” [pág. 263]. La protección de los archivos y de la documentación oficial es un aspecto de primer orden en esta coyuntura nacional, porque es necesario que se sepa la verdad sobre lo que ha pasado en los últimos setenta y cinco años, sus responsables, el papel de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, de los partidos tradicionales en el origen y mantenimiento de la violencia en

Colombia. Por ello, también ahora se habla de la desaparición de archivos, como los del DAS.

En las páginas finales del libro, se extrae como conclusión un elemento central al señalar que la responsabilidad en el conflicto armado que vivimos no es de quienes se han rebelado, sino del Estado y de las clases dominantes, que se han negado a impulsar reformas elementales que apunten a la democratización del país para mantener sus privilegios y preservar en sus prácticas criminales y corruptas.

Este es un libro notable y muy oportuno, en esta época en que tanto se habla de la “verdad, la justicia y la reparación”, que deberían leer todos los colombianos, pero que en forma lastimosa como sucede con la producción académica, quedará restringido a unos pocos lectores. Debería ser leído en forma masiva, porque sencillamente es una radiografía descarnada de nuestra historia, documentada de manera profunda y basada en un conocimiento sistemático de la historia de Colombia, así como de sus archivos.

La única crítica que le haríamos al autor, secundaria y menor, es que hable de erario público [págs. 54 y 66], lo cual es una repetición innecesaria puesto que el erario hace referencia al “conjunto de bienes, haberes y rentas pertenecientes al Estado”. La segunda crítica radica en la continua utilización que hace, sobre todo en el capítulo tres sobre “La bolsa o la vida”, de “grupos ilegales”, “grupos armados ilegales”, “organismos al margen de la ley”, “grupos al margen de la ley”, “grupos armados al margen de la ley”, cuando toda la exposición de principio a fin lo que demuestra es que la corrupción en Colombia rompe la frontera entre lo legal y lo ilegal y que el Estado mismo es una empresa ilegal, por donde se le mire. ¿Acaso es legal la corrupción de los magistrados, jueces y parlamentarios porque forman parte de una rama legal del Estado? No, lo que encontramos es que el Estado mismo, por su proceso de construcción, es terriblemente ilegal, como lo prueban los asesinatos que se encubren con el eufemismo de los falsos positivos.

Renán Vega Cantor

Profesor titular,

Universidad Pedagógica Nacional